

## Proyecto instituciones *ad hoc* para municipios en Colombia

### **POBREZA, DEBILIDAD INSTITUCIONAL, CULTIVOS ILÍCITOS, TRÁFICO DE DROGAS Y GRUPOS ARMADOS ILEGALES EN BUENAVENTURA Y TUMACO**

César Molinares | Periodista

Elizabeth Reyes Le Paliscot | Periodista

Ante los desafíos de déficit de presencia estatal en el territorio o de captura del Estado por organizaciones armadas ilegales en cientos de municipios colombianos, el objetivo del proyecto Instituciones *ad hoc* para municipios en Colombia, desarrollado por la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol) e Idea Internacional, es brindar soporte técnico a un proceso de deliberación política para formular un proyecto de ley que cree una política pública de largo plazo y una institucionalidad estatal *ad hoc* dirigida a territorios en donde una o varias fuerzas ilegales se han disputado la soberanía estatal o la han capturado en su propio beneficio. En el marco de este proyecto, los análisis fueron elaborados durante el año 2012.



Foto: Nicolás Vargas Ramírez

## Introducción\*

Este análisis periodístico examina dos municipios de la costa Pacífica colombiana, Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca), y muestra las debilidades de la institucionalidad colombiana para enfrentar los problemas de seguridad que surgen o giran alrededor del conflicto armado y la lucha contra las drogas. Al seleccionarlos se tuvieron en cuenta siete indicadores de violencia, a saber: el índice de homicidios, masacres, secuestros, combates, ataques a la población civil y víctimas por minas antipersona o explosivos. También que los dos hacen parte del grupo de las quince zonas seleccionadas en el país para la implementación del llamado Plan nacional de consolidación (PNC), que se viene desarrollando desde el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2006, 2006-2010) en territorios con presencia histórica de grupos armados ilegales.

Aun cuando, según sus objetivos, el interés del PNC, además de pacificar el territorio y recuperar la institucionalidad, es que los ciudadanos gocen de sus derechos, al confrontar a las fuentes (investigadores, representantes de organismos internacionales y ONG, miembros de la iglesia católica, líderes barriales)<sup>1</sup>, a la institucionalidad y a los observadores independientes que siguen este proceso en Tumaco y Buenaventura, se encontraron contradicciones en la atención a los ciudadanos y a las víctimas del conflicto armado debido al enfoque militar predominante. De ahí que una de las conclusiones de este artículo es que las instituciones que, en teoría, deben atender a la población civil y defender sus derechos, son débiles e ineficientes y funcionan desarticuladamente, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del Plan de consolidación y su legitimidad. Otra es que, aun cuando las políticas antidrogas y antisubversión están empezando a incluir parámetros de protección a la población, los pobladores de las zonas rurales y urbanas de los dos municipios siguen sintiéndose inseguros y, con frecuencia, ven vulnerados sus derechos por los mismos funcionarios del Estado que dice estar dispuesto a protegerlos y a velar por mejorar su calidad de vida.

Si bien la etapa de consolidación está en sus fases iniciales (de alistamiento y recuperación), y allí el componente militar es muy importante para la recuperación de la seguridad, son preocupantes sus efectos, así como las reacciones de los grupos armados ilegales sobre la población civil. Aunque deben reconocerse los avances y logros obtenidos con el regreso de la institucionalidad a zonas en donde la presencia del Estado era limitada, por no decir que inexistente, el conflicto armado sigue y sus efectos sobre la población civil continúan, en aspectos como el reclutamiento legal e ilegal de niños y jóvenes, la violencia sexual, el microtráfico de drogas, el desplazamiento forzado, el confinamiento, la prostitución y la extorsión, por citar algunos. Por otro lado, en estas zonas hay también una institucionalidad paralela, compuesta por agencias de cooperación y organizaciones no gubernamentales que hacen presencia sin articulación ni contacto con la institucionalidad oficial, con la que en ocasiones no comparte estrategias ni políticas de acción.

De acuerdo con el análisis que se presenta a continuación, que consultó fuentes independientes y oficiales, es posible concluir que en los dos municipios estudiados se percibe que la prioridad de la política de consolidación del gobierno no es la población

\* Este documento es de responsabilidad exclusiva de sus autores y no traduce necesariamente el pensamiento de Fescol e Idea Internacional.

<sup>1</sup> Por motivos de seguridad omitimos los nombres de algunas de las fuentes consultadas.

en sí, sino la seguridad, expresada en términos de ganar la guerra contra las drogas y la subversión, a pesar de los mandatos constitucionales que obligan a las autoridades a defender prioritariamente los derechos de los ciudadanos colombianos. Este es el punto crítico para que cualquier política de seguridad funcione. Varios analistas coinciden en que “debería tratarse más bien de establecer y consolidar la presencia legítima del Estado, pero no de un Estado guerrero, sino de un Estado de paz”. No obstante, esta investigación encontró que en Buenaventura y Tumaco, a pesar de que en la primera parte del Plan nacional de consolidación (2004-2008) se invirtieron \$472.000'000.000, los grupos ilegales presentes en la región, viejos y nuevos, se adaptaron a las nuevas políticas públicas y siguen lucrándose del negocio del narcotráfico y reclutando a niños y jóvenes. Los cultivos ilícitos, que han disminuido, continúan. Y las afectaciones y las violaciones a los derechos humanos de la sociedad civil producto del conflicto armado siguen, con el agravante de que la población desconfía de las instituciones.

### Buenaventura y Tumaco, municipios críticos

La investigación tomó como punto de partida, como se dijo, la comparación de siete parámetros de seguridad en los municipios más críticos de Colombia, los que, según cifras oficiales, están entre los más inseguros del país por los numerosos casos de muertes violentas, violaciones a los derechos humanos, extorsiones y desplazamientos forzados por el conflicto armado. Esta comparación buscaba elegir dos municipios con los indicadores más negativos y, por ende, en mayor riesgo. Para ello se seleccionaron las siguientes siete categorías, usadas generalmente en el estudio de los conflictos armados: índice de homicidios, masacres, secuestros, combates, ataques a la población civil, víctimas por minas antipersona o explosivos y desplazamiento.

La selección se hizo entre los municipios que no correspondieran a la categoría de capitales de departamento, para destacar los casos en los que, a diferencia de estas, la institucionalidad es muy débil y los grupos armados ilegales siguen haciendo presencia. En casos de ciudades intermedias que cumplen con estos criterios, como Buenaventura y Tumaco, es posible identificar mayores dificultades para manejar los problemas de inseguridad y orden público.

Luego del cruce de estadísticas de las siete categorías mencionadas, que incluyen cifras de la última década (2001-2011) según fuentes oficiales como la Policía Nacional, el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y no oficiales como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y Fondelibertad, entre otros, los resultados (véase la tabla 1) situaron a Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño), en su orden, como los dos municipios con los escenarios más preocupantes de inseguridad, por lo que decidimos analizarlos.

**Tabla 1. Buenaventura y Tumaco: homicidios, secuestros, masacres, víctimas de minas antipersona, ataques a la población civil y desplazamiento forzado, 2001-2011**

Municipio	Homicidios	Secuestro	Masacres	V. Minas	Ataques	Desplazam.
B/Ventura	2.847 (2001-2011)	115 (2001-2011)	13 (2001-2011)	32 (2001-2011)	41 (2008-2010)	92.772 (1990-2011)
Tumaco	2.063 (2001-2011)	51 (2001-2011)	13 (2001-2011)	45 (2001-2011)	41 (2008-2010)	56.092 (2001-2011)

Buenaventura encabeza las cifras de homicidios en todo el país, con 2.847 muertes entre 2001 y 2011, seguida de Palmira, Tuluá y Tumaco, esta última con 2.063 muertes en la última década. En el caso de las masacres, Buenaventura también comparte el primer lugar en los municipios del país, con 13 en la última década, con Tumaco, con 13 también. En la categoría de secuestros, Buenaventura está en el cuarto lugar, con 115 casos, luego de Aguachica (Cesar) con 162, Ciénaga (Magdalena), con 148, y San Luis (Antioquia) con 123. En esta categoría, Tumaco registró 51 casos.

En la categoría de víctimas de mina antipersona, Tumaco estaba en el tercer lugar, con 83 víctimas registradas, luego de Tame (Arauca) y Cocorná (Antioquia). En cuanto a combates y ataques a la población civil, las cifras más recientes registran 41 ataques en cada uno de los dos puertos entre 2008 y 2010. Finalmente, las cifras de desplazamiento forzado son alarmantes también. Según datos de Acción Social de la Presidencia de la República, desde 1990, en Buenaventura 92.772 personas se vieron obligadas a salir de sus casas por cuenta de la violencia, mientras que en Tumaco lo hicieron 56.092.

Como parte del análisis de los dos casos elegidos, que se presentan a manera de reportajes periodísticos, el texto incluye una descripción de las políticas públicas desarrolladas allí en los últimos años para contrarrestar los efectos de la criminalidad, el conflicto, la violencia y sus impactos. Cada reportaje está alimentado por entrevistas a fuentes primarias en los dos municipios, que buscaban conocer las razones del comportamiento de los grupos armados ilegales, sus motivaciones e intereses, cómo capturaron al Estado, cuándo lo hicieron, la respuesta de la fuerza pública, la corrupción, el reclutamiento forzado, el desplazamiento por conflicto de tierras, los cultivos ilícitos y los índices de violencia generados allí por todo lo anterior.

## Guerra en Tumaco

Con casi 180.000 habitantes, según el Dane, la mayoría afrocolombianos (88,9 por ciento), Tumaco, cerca de los límites con Ecuador, al sur de Colombia, es hoy el mayor campo de batalla del Pacífico colombiano debido a la presencia histórica de la guerrilla de las Farc y a la de los paramilitares y las llamadas bandas criminales (Bacrim), que se disputan este territorio convertido en la 'perla de la coca' desde que los cultivos emigraran del departamento del Putumayo, a principios de la década de 2000, a consecuencia del Plan Colombia.

Tumaco es además uno de los pocos municipios de Colombia donde ocurren todas las fases del proceso de producción de la cocaína. Allí se cultiva la hoja de coca, se procesa y transforma en cocaína, y además desde allí se exporta. Este puerto es un territorio estratégico para la criminalidad y el conflicto armado en el sur del país. Según el informe *Que nadie diga que no pasa nada*, publicado por la Diócesis de Tumaco en marzo de 2011, los grupos armados ilegales han gozado históricamente de varias ventajas.

Ofrece rutas terrestres y fluviales que son utilizadas para la movilización de tropas, armas y narcóticos por las guerrillas de las Farc (frente 29) y ELN (frente Mariscal Sucre) y organizaciones criminales como las Águilas Negras, Autodefensas Campesinas de Nariño-ACN, los Rastrojos y la organización Nueva Generación, a lo que se suma una fuerte militarización de la Fuerza Pública.

La guerra allí cuenta con el combustible del negocio de las drogas: según un informe de las Naciones Unidas de junio de 2011, Nariño era el departamento con el mayor número de hectáreas sembradas de coca en todo el país: casi 6.000 hectáreas. Tumaco, por su parte, concentraba 8,8 por ciento del área sembrada de coca en Colombia, a lo que se sumaba 21 por ciento de la producción de cocaína. Según estas cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, este puerto encabezaba la lista de los municipios con mayor área cultivada del país, seguido por Barbacoas, en el mismo departamento, Cumaribo en Vichada y Tierralta en Córdoba.

A lo anterior se suma, de acuerdo con datos del Observatorio de la Presidencia para los Derechos Humanos, que de las 1.757 acciones de los grupos armados ilegales en Colombia entre 2008 y 2010, 209 se registraron en Nariño y 20 por ciento en Tumaco, equivalentes, se dijo, a 41 ataques, ataques que aumentaron durante 2011. Según cifras oficiales, las acciones de grupos ilegales en Tumaco crecieron 69 por ciento entre 2010 y 2011, debido, en gran medida, a la reactivación de la guerrilla, a la llegada de más miembros de las fuerzas militares y a las acciones de las Bacrim. Todo junto ha puesto a este municipio como uno de aquellos donde es mayor el número de homicidios, desplazamiento forzado, secuestros, ataques con minas antipersonal y masacres en el país.

Tal como se mostró en la tabla 1, entre 2000 y 2011 en este puerto del Pacífico se presentaron 2.063 homicidios, lo que lo ubica como el cuarto municipio de Colombia con más muertes violentas. En 2009, por ejemplo, el Observatorio del Delito en Tumaco reportó 277 homicidios, que en 2010 fueron 230, lo que equivale a una tasa de más de 142 por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio nacional es de 32. Así las cosas, en Tumaco son asesinadas 4,4 veces más personas que en el resto del país. En cuanto al número de masacres, esta ciudad tiene también registros preocupantes. Junto con Buenaventura encabeza la lista nacional, con trece masacres cometidas en los últimos diez años, en las que fueron asesinadas 74 personas, aunque de acuerdo con los datos de instituciones como la Diócesis de Tumaco las cantidades reales superan de lejos las oficiales. Según la Diócesis, en 2009 y 2010 hubo doce masacres, en las que murieron 95 personas, víctimas en su mayoría de los Rastrojos y las Farc. Para la Diócesis hay un gran subregistro al respecto en toda la región.

En cuanto al desplazamiento forzado, de acuerdo con información de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en 2011 de Tumaco se desplazaron forzosamente 10.898 personas, la segunda mayor cantidad de personas en esta situación en un municipio del país, después de Buenaventura. De 2001 a 2011, 56.092 personas fueron desplazadas, de las cuales 10.547 eran niños; a su vez, en ese mismo periodo Tumaco recibió 23.778 personas, ocupando el primer puesto de municipios receptores en toda la costa nariñense según el Sistema de Información de Población Desplazada (Sipod) de Acción Social. La razón del desplazamiento no es otra, afirma la Diócesis de Tumaco, que la invasión de los territorios por parte de los actores armados que ejercen el control social y territorial mediante señalamientos, la imposición de horarios para movilizarse de una vereda a la otra, el cobro de vacunas, el reclutamiento de menores, las amenazas directas a personas y comunidades, los combates en medio de los caseríos de la población civil, las tomas guerrilleras, las incursiones paramilitares y militares, las masacres y los asesinatos selectivos. A lo que se suman los desplazamientos ocasionados por las fumigaciones de cultivos ilícitos, que afectan también los de pan coger, así como los cuerpos de agua. El infor-

me general de 2010 de la Umata (Unidad Municipal de Atención Técnica Agropecuaria) de Tumaco así lo confirma.

A raíz de los desproporcionales resultados erróneos de la fumigación, se está presentando el fenómeno de desplazamiento por hambre, lo que conlleva el aumento de la violencia, robos, asesinatos y prostitución infantil, un cruel desenlace para una política que busca mejorar la calidad de vida de los colombianos, generando un problema social que debe ser atendido por las partes responsables del hecho.

La Umata había recibido 3.175 quejas por afectaciones debido a la fumigación aérea, de las cuales 183 fueron admitidas por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran) y 105 reconocidas económicamente.

La gravedad del desplazamiento en este municipio es más evidente al comparar la participación con respecto a las cifras departamentales. Entre 2008 y 2010, 80.498 personas fueron desplazadas en el departamento de Nariño, de las cuales 31.920 provenían de Tumaco, es decir casi 40 por ciento de todos los desplazados del departamento.

En cuanto a los secuestros, su incremento y cantidad también prendieron las alarmas. Según Fondelibertad, en la última década en Nariño se cometieron, al menos, 412 secuestros, de los cuales 51 en Tumaco.

En relación con los eventos con minas antipersonal y munición sin explotar, entre 2001 y 2011 en Tumaco hubo 83 accidentes, en los que murieron ocho civiles y ocho militares y 34 personas quedaron heridas.

Este panorama desolador de seguridad incluye también la violación a los derechos humanos en los territorios indígenas de los pueblos awá y el eperara-siapidara, que viven lo largo de toda la costa pacífica nariñense. Según Pastoral Social, los grupos guerrilleros, los paramilitares y la fuerza pública se mueven por todo ese territorio, “en una actitud ilegítima que desconoce la autoridad de la guardia indígena (hombres, mujeres, jóvenes y niños luciendo con valentía y fortaleza no un arma, sino un bastón de mando)”, lo que ha provocado masacres, torturas y desplazamiento, sobre todo en los resguardos awá. Debido a las alarmas, a comienzos de 2009 la Corte Constitucional los incluyó en la lista de pueblos indígenas en peligro de extinción.

### **Tras la coca: el análisis**

Los habitantes de Nariño cuentan que en la década de los ochenta la presencia de grupos armados en el departamento no era significativa. Según entrevistas con fuentes informadas, las Farc y el ELN empezaron a hacer presencia desde los años noventa. Estos dos grupos, recuerdan los entrevistados, tenían una presencia más bien tenue que se limitaba a un par de frentes, el 29 de las Farc y la columna Mariscal Sucre del ELN, que operaban en las estribaciones de la cordillera Occidental.

Aunque en términos generales esta zona estaba más condenada al olvido que a la violencia, se recuerda que entre Llorente (en el piedemonte) y Tumaco, poco a poco empezaron a instalarse sectores mafiosos que compraron haciendas para lavar dinero. Uno de ellos fue la familia Aparicio, conectada con el cartel de Medellín. Según un informe del Instituto Colombiano de Antropología e Historia de 2005, entre 1992 y 1994 trescientas personas fueron asesinadas lo largo de la carretera Tumaco-Pasto,

por órdenes de Jairo Aparicio, testaferro de narcotraficantes que poseía una hacienda ubicada en la vereda Vaquerio, del municipio de Lorente. Varias fuentes coinciden en que esta fue la llegada de los narcotraficantes y sus negocios, y de la presencia de los grupos armados ilegales en la región. Otros factores incidirían también para que Nariño y Tumaco se convirtieran en zona de narcos.

La migración cocalera empezó a finales de la década del noventa, cuando, de acuerdo con el Plan Colombia, se inició una ofensiva militar y de fumigaciones en el Putumayo, que en ese entonces concentraba la mayor cantidad de cultivos ilícitos en el país, lo que provocó el desplazamiento de miles de campesinos y colonos de esa región al municipio nariñense de Lorente, a tan solo 60 kilómetros de Tumaco. Así, el narcotráfico empezó a copar nuevos espacios y esta dinámica repercutiría en el departamento y sus municipios costaneros.

Los grupos armados de la región empezaron entonces las disputas para controlar el tráfico de insumos y a cobrar por la producción de coca, instalaron cocinas en la zona del piedemonte y empezaron a usar el litoral para el transporte de insumos desde el Ecuador. “Este pueblo (Lorente) creció como una Babilonia”, dice la misionera laica Gaby May, de la Diócesis de Tumaco. “Después de llegar la invasión, el pueblo se llenó de chongos (burdeles) y restaurantes, y la población nativa tuvo que irse”. May asegura que el pueblo, de apenas tres mil habitantes, llegó a tener nueve mil, solamente en el casco urbano, la mayoría colonos dedicados a cultivar la hoja de coca.

Según un estudio de junio de 2010 que le hizo seguimiento al Plan consolidación, elaborado por un grupo conformado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), el Centro de Política Internacional (CIP), con sede en Washington también, y las ONG colombianas Asociación Minga y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las Farc y el ELN comenzaron a recaudar fondos para la compra de armas extorsionando a los cultivadores de coca, pasando rápidamente a participar en la producción y el tráfico. Los grupos guerrilleros, en especial el frente 29 de las Farc, empezaron a asesinar a los líderes comunitarios que consideraban una amenaza a su dominio, a extorsionar a propietarios de negocios y a controlar los movimientos de las comunidades a lo largo de los ríos.

En el informe se consigna que la presencia del Estado en Tumaco era escasa, limitándose a unos pocos militares y puestos de policía y a un gobierno municipal muy corrupto. “Los representantes del gobierno pasaban muy poco tiempo fuera de la cabecera municipal, dejando a las comunidades olvidadas en los ríos a merced de los grupos armados”. El reporte dice también que en 2000 el comercio de la droga atrajo a las Autodefensas Unidas de Colombia, específicamente del bloque Libertadores del Sur. Y que al igual que en otras zonas de influencia guerrillera, los grupos paramilitares recién llegados desataron una brutal ola de ejecuciones y masacres de quienes creían colaboradores de la guerrilla.

Entre 2000 y 2006, año de desmovilización del Libertadores del Sur, su accionar obligó a desplazarse a cerca de 80.000 personas (cifra de Codhes) hacia la cabecera municipal de Tumaco y a otras ciudades del país, mientras que miles más cruzaron la frontera hacia Ecuador.

La presencia paramilitar en Nariño y particularmente en Tumaco data de 1999, cuando Diego Fernando Murillo, *don Berna*, y luego Carlos Mario Jiménez, *Macaco*, enviaron sendos grupos para disputarle esta zona a las Farc y al ELN. Según la Fiscalía Cuarta de

Justicia y Paz, el grupo paramilitar se instaló en el puerto durante el segundo semestre de 1999 bajo las órdenes de Roberto Carlos Delgado, *Negro Pacho*, y Rigoberto Urrea, *Ferney*, quienes crearon un primer grupo. A los seis meses, *Macaco*, ex jefe militar del bloque Central Bolívar, que delinquiró en ocho departamentos, envió a *Pablo Sevillano* como jefe en Nariño. Este grupo paramilitar estaba conformado por tres frentes: Héroes de Tumaco y Llorente, Lorenzo Aldana y Brigadas Campesinas Antonio Nariño, este último en alusión al grupo de las Farc que tenía presencia en la región.

Según un informe de la Fundación Seguridad y Democracia, los paramilitares se repartieron la llanura pacífica y la costa de Nariño. El frente Héroes de Tumaco tenía su centro de acción entre Tumaco y Llorente, con presencia en el puerto y tomando como ejes de acción el río Mira así como el último tramo de la vía que de Pasto conduce a la costa pacífica. El Lorenzo Aldana tuvo su zona de influencia en los ríos Patía y Telembí. Por otro lado estaban las Brigadas Campesinas Antonio Nariño, que delinquirían en el extremo suroccidental del Macizo colombiano.

De acuerdo con la revista *Semana*, *Sevillano* coordinaba las mulas del cartel del Norte del Valle, donde comenzó su carrera en el narcotráfico. Este paramilitar pagó varios millones de dólares a las AUC por el control de la ruta del narcotráfico entre Buenaventura y Tumaco, así como por “la franquicia para”.

Según un informe de 2003 de la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, bajo protección paramilitar las hectáreas cultivadas en Nariño se incrementaron 17 por ciento en relación con 2002. A diciembre de 2003 un cálculo conservador estimaba en 17.000 el número de hectáreas sembradas de coca, aun cuando otros reportes señalaban que estas podrían llegar a 40.000.

El efecto de la mezcla entre coca y grupos armados llevó a que la tasa de homicidios en Tumaco pasara de 53 por cada 100.000 habitantes en 2000 a 82 en 2001 y a 99 en 2002. La reacción del gobierno fue prolongar el Plan Colombia en Tumaco y sus zonas rurales. Según el informe de Wola, el Centro de Política Internacional, la Asociación Minga e Indepaz, la respuesta inicial de los gobiernos estadounidense y colombiano a la crisis de violencia y narcotráfico que sufría Tumaco fue la de fortalecer la presencia estatal en este municipio mediante el Plan Colombia, que luego se convertiría en el Plan nacional de consolidación. De acuerdo con este informe:

El Plan Colombia inició un fuerte aumento en la fumigación aérea de herbicidas sobre los territorios colectivos de propiedad de los consejos comunitarios. Nariño, liderado por Tumaco, ha sido, por mucho, el más fumigado de los 32 departamentos de Colombia durante los últimos diez años.

El estudio de estas organizaciones explica, además, que a pesar de la fumigación a gran escala, los cultivos de coca han demostrado ser difíciles de erradicar en Tumaco. “Esto es en gran parte resultado de la ausencia del Estado en la mayoría del territorio y la falta de otras alternativas económicas para los productores”.

El impacto del narcotráfico y la debilidad estatal se vieron reflejados muy pronto en el deterioro de la situación de seguridad de la zona. Entre 2000 y 2003 los paramilitares ganaron el pulso por el control de la producción y comercialización de coca, atacando a la población civil y aprovechando la débil respuesta institucional para permear la política y la fuerza pública. Luego, y como se dijo, la estructura del bloque Libertadores del Sur se desmovilizó parcialmente tras la negociación entre el gobierno del presiden-



te Uribe y los paramilitares. No obstante, según varias fuentes de la zona, algunos de sus hombres recalieron en el grupo conocido como los Rastrojos, quienes entraron a disputarle, como lo habían hecho las AUC en el pasado, el control del negocio de la coca a los grupos guerrilleros.

Según el portal periodístico VerdadAbierta.com, el Libertadores del Sur dejó las armas el 30 de julio de 2005 en la finca El Romance, ubicada en la inspección de Policía El Tablón, del municipio de Taminango (Nariño), con 689 miembros y la entrega de 596 armas. Luego de su desmovilización, las Farc y el ELN intentaron retomar el territorio y se registró la presencia de nuevos grupos paramilitares, como las Águilas Negras, que terminaron sometidas a la guerrilla, y los Rastrojos.

Las Farc, estratégicamente, se han quedado en los municipios aledaños a Tumaco y en las zonas rurales en donde reclutan a las comunidades indígenas. En Tumaco se mueven por medio de las llamadas milicias. Según fuentes consultadas, su estrategia para retomar el territorio se centra en su reaparición mediante la figura de líderes rebeldes que llegan a salvar a la población de las llamadas Bacrim, aun cuando en el fondo lo que buscan es retomar el control del narcotráfico o, al menos, a que se les pague por el gramaje. De hecho, uno de sus jefes es un nativo de Tumaco llamado José Castro Chillambo, conocido como *el Doctor*, que estaría a cargo de las milicias urbanas. "Las Farc operan en pequeños grupos. A nivel urbano han entrado muy discretamente, no reclutan, su reclutamiento es en lo rural. Las comunidades más golpeadas son los indígenas, los awá", explicó una fuente.

Este grupo guerrillero intenta retomar el control sobre la carretera Tumaco-Pasto, moviéndose continuamente en poblaciones pequeñas, mientras que en Tumaco ha logrado cooptar, contando con redes de apoyo, espacios comunitarios como barrios, lo que les permite hacer inteligencia y cometer atentados dinamiteros a estaciones de Policía y establecimientos comerciales. En la región se percibe que las Farc han ganado algún terreno en lo militar y que su incidencia política se ve reflejada en el intento por copar terreno dentro de las comunidades, en las que se habla de que se "han metido a los consejos comunitarios, en donde han amenazado a líderes". Este grupo se opone a la erradicación o aspersión de cultivos de coca, por lo que se han registrado casos de hostigamientos a las poblaciones aledañas a los ríos Chagüi, El Mexicano y El Rosario, a las que acusan de desarrollar los programas gubernamentales de sustitución de cultivos.

Entre tanto, los Rastrojos, muchos de ellos paisas y costeños, enviados por el cartel del Norte del Valle, han aprovechado la desmovilización del bloque Libertadores del Sur para entrar a la zona e intentar controlar la línea de producción de la cocaína. "Los Rastrojos están en las comunas 4 y 5, en los barrios Los Ángeles California, Buenos Aires, Viento Libre, Panamá, y toda la zona aledaña al puente del Pindo, que comunica a la isla con la zona continental", explica un líder comunal.

Fuentes consultadas explicaron que operan fundamentalmente en las zonas urbanas, en donde reclutan a jóvenes nativos, a quienes obligan a cometer asesinatos y extorsiones. Se financian mediante el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de insumos, y están relacionados con redes de prostitución y envío de niñas a Esmeraldas y San Lorenzo, en la zona fronteriza con Ecuador.

## La disputa por los barrios

En Tumaco la guerra entre los grupos armados se ha concentrado en los barrios más pobres. Según Pastoral Social, la manera como proceden para ejercer control social tiene patrones comunes.

“Varias personas extrañas al barrio llegan y se instalan a vivir en una casa, en ocasiones a la fuerza. Aprovechándose del tradicional sentido de acogida de la cultura afro empiezan a relacionarse con muchachos y muchachas. Después de un tiempo comienzan a involucrarlos como informantes y colaboradores”, explica el informe de la Pastoral.

La pobreza en el puerto es tan extrema y el nivel de coacción y captación tal que según denuncias los alumnos extorsionan a los profesores para aprovecharse de su sueldo. “Les piden plata pero les dicen que no se vayan del colegio. La sensación es que todo está fallando”, dice un funcionario de un organismo internacional que trabaja en la zona. En los colegios se están presentando también casos de tortura por supuestos vínculos de los estudiantes con los grupos armados.

Así, el barrio empieza a ser controlado mediante la vigilancia de las entradas, la instalación de retenes o la imposición del toque de queda en horas de la noche: a las nueve, por ejemplo. Los grupos paramilitares se pasean con radios de comunicación por las calles y protagonizan tiroteos que duran hasta diez minutos. “En ocasiones, ni siquiera la policía se atreve a entrar”, dice el informe *Que nadie diga que no pasa nada*. También amenazan distribuyendo panfletos y el secuestro extorsivo es una nueva modalidad de financiación. Los niños se convierten en *campaneros* y las niñas, debido a la presión, se prostituyen.

Según una fuente, “Hay grupos pequeños que se encargan de recibir la micro extorsión. Sus líderes son jóvenes entre 14 y 16 años, altos, con cortes de pelo y ropa muy moderna y cara de serios”.

En septiembre de 2011, un comunicado de la Diócesis denunció el aumento de la lucha por el control de territorio en los barrios por parte de los grupos armados al margen de la ley, creando unas mal llamadas fronteras invisibles defendidas a muerte, lo que ha generado desplazamientos internos de las familias.

Los pobladores se sienten rehenes en sus propios barrios y veredas. Como están fuertemente intimidados, no salen de sus casas a partir de las nueve de la noche, impidiendo reuniones y perjudicando seriamente la vida social y las relaciones tradicionalmente acogedoras del pueblo afro.

Las tres islas que forman parte de Tumaco, El Morro, La Deliciosa y El Pindo, se han convertido en las fronteras entre los grupos armados ilegales. Los Rastrojos, por ejemplo, controlan toda la zona de El Pindo, que comunica al puerto con la zona continental.

No obstante, a diferencia de lo que sucedía durante los años del auge paramilitar, estas bandas no tienen mandos visibles. “Antes se sabía con quién se tenía que hablar. Hoy, los que responden no están en la zona”, dice un defensor de derechos humanos de Tumaco. Según la Diócesis, las comunidades tienen la impresión de que la fuerza pública minimiza el impacto de la violencia y la gravedad de los hechos contra la población civil, presentando estadísticas de reducción del 30 por ciento de asesinatos. Sin embargo, la tasa de asesinatos en Tumaco duplica la media nacional, lo que ha aumentado sustancialmente el miedo y la sensación de inseguridad. De acuerdo con un informe de la institución:

La percepción general es que la situación se les ha salido de las manos (a la fuerza pública) y que no controlan la situación de orden público. Este grave aumento de la inseguridad ha ocasionado, por parte de la población, una desconfianza grande en la Fuerza Pública.

A esta desconfianza se suman los vínculos de miembros de la fuerza pública o de otras instituciones del Estado con las Bacrim. En septiembre de 2009, por ejemplo, el jefe del DAS de Tumaco, Víctor Gonzalo Ojeda, fue capturado, acusado de apoyar a las Águilas Negras. Durante su captura cayeron además más de 30 presuntos integrantes de este grupo paramilitar, que pronto se vieron caminar libres por las calles de Tumaco. El 14 de octubre de 2010, por su parte, fueron capturados tres oficiales, dos suboficiales y un infante de Marina por presunta colaboración con los Rastrojos.

En este sentido, buena parte de los entrevistados consideran que el aumento del pie de fuerza ha sido excesivo y cuestionan el perfil de los soldados y oficiales destinados al puerto. De acuerdo con un conocedor de la situación de Tumaco, la inexperiencia y la juventud de los efectivos desplegados ocasionan que sean fácilmente corruptibles por cualquier actor armado. “Ese es quizás el principal problema para una población que desconfía de cualquiera”, agrega.

### **La respuesta estatal**

A la violencia generada por la coca en el departamento de Nariño, el gobierno nacional respondió con el Plan Colombia y la selección de algunos municipios como una zona de consolidación. El departamento se convirtió entonces en un laboratorio de erradicación manual y fumigación de cultivos ilícitos, con un incremento del pie de fuerza sobre todo en la cabecera municipal de Tumaco. Se formularon proyectos *alternativos* como la palma y el cacao para la población de las zonas rurales, y, en teoría, se trabajó en el reforzamiento institucional, nacional e internacional.

Nariño se constituyó en zona de consolidación bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y lo sigue siendo. El Plan nacional de consolidación fue creado en 2004 para intervenir en 15 regiones del país en cuatro fases: alistamiento, recuperación, transición y estabilización. Consiste en “la armonización y sincronización de las acciones del Estado en el territorio en función de la dinámica de la recuperación de la seguridad territorial, que corresponde a la fuerza pública, para neutralizar la amenaza contra la institucionalidad democrática”. Sus objetivos incluyen proteger al ciudadano con el fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, responsabilidad de la Policía Nacional y del sistema judicial, y, también, impulsar el desarrollo económico, social, cultural e institucional, que corresponde a la acción integral del estado para promover el desarrollo humano.

De acuerdo con un representante de un organismo internacional que hace presencia en la zona, al inicio del Plan el componente militar permitió la recuperación de la seguridad en la vía que de Tumaco conduce al interior de Nariño y una mayor presencia física de la fuerza pública en el casco urbano y las principales vías del departamento.

En Tumaco confluyen actualmente más de siete mil hombres de la fuerza de tarea Pegaso, compuesta por la Policía (el Grupo de Operaciones Especiales y la Sijín), el Ejército, la Fuerza Naval del Pacífico, el Gaula militar y de la Policía, entre otras instituciones militares y de policía, y la Fiscalía General de la Nación. No obstante, pese

a estas medidas, que redundan en lo militar, uno de los principales temores de la población tumaqueña es que la fuerza pública que llega a la región no conoce el terreno en el que se mueve, tal como se dijo. “Estos muchachos no conocen Tumaco, los barrios, los esteros”, dice la hermana Gaby May, quien cree que esta situación es un peligro para los efectivos de la fuerza pública. “Están haciendo presencia con sus rifles y armas en la mano y sin embargo los sicarios sí conocen el pueblo”. Antonio Navarro Wolf, quien fue gobernador de Nariño entre enero de 2008 y diciembre de 2011, señala que de nada sirve “poner fuerza militar si no está acompañada por programas sociales y vínculos con la población”.

Mientras esto ocurre con los grupos armados legales, los ilegales sacan provecho del desorden. Analistas consultados coinciden en que la presencia física de la fuerza pública en Tumaco no ha significado la recuperación del territorio ni el mejoramiento de la institucionalidad. Por el contrario, allí se dice abiertamente que hay barrios enteros bajo el control de la guerrilla o las bandas criminales, en donde la fuerza pública no puede entrar y en los que las autoridades municipales tienen que pedir permiso para hacerlo.

Otro aspecto generador de violencia es que, en algunas oportunidades, cuando las autoridades intentan acercarse a la población, lo hacen para pedir información sobre los grupos armados, convirtiéndola, en muchas ocasiones, en objetivo militar de los ilegales. Para ganarse la confianza de la ciudadanía, además de combatir la presencia de los grupos armados ilegales, a la fuerza pública se le asignó también la tarea de hacer jornadas cívico-militares que, a juicio de algunas organizaciones consultadas, intentaron, y lo siguen haciendo, sustituir la inversión social que demandan las comunidades.

En el caso del agresivo plan de erradicación de cultivos ilícitos que combina la aspersión con glifosato y la erradicación voluntaria, hay también contradicciones y debilidades. Un defensor de derechos humanos de la zona considera que los programas alternativos de producción han sido improvisados y no tienen continuidad alguna. “Son una especie de pantalla, y se hacen basados en estudios de escritorio, sin conocer el territorio”, agrega. Cita el ejemplo de un proyecto de cría de cerdos que se adelantaba en una vereda que fue fumigada. “Se murieron los cerditos y se murió el proyecto”. Como este hay otros ejemplos de improvisación en las alternativas que se les dan a los campesinos dedicados a los cultivos ilícitos.

En Tumaco hacen presencia organizaciones internacionales y ONG nacionales que han canalizado esfuerzos y recursos en programas sociales y de acompañamiento a la población, los que no han repercutido en neutralizar la llegada de nuevos actores armados como los Rastrojos y las Águilas Negras y el reposicionamiento de las Farc, fundamentalmente, en la zona rural del municipio.

El general Mario Valencia, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Pegaso, reconoce que en Nariño se vive una confrontación de grupos guerrilleros (ELN y Farc) y bandas criminales, “quienes financiándose con el narcotráfico quieren mantener un dominio o una presencia sobre unos lugares importantes del departamento”.

En esa dinámica, los grupos armados han cambiado su forma de operación y, contrario a lo que ocurrió con los paramilitares de las extintas AUC que llevaron sus tropas desde otras regiones, están reclutando menores para sus filas y también para sus cultivos de coca.

“Desafortunadamente la población civil está en medio de estas bandas criminales y sufre todos los eventos nocivos, porque es víctima del desplazamiento forzado, del reclutamiento forzoso de menores, inclusive es obligada en ocasiones a cultivar la coca, se ve también inducida a la minería ilegal, en fin, no recibe sino pura influencia negativa”, explica el general Valencia.

El reclutamiento forzado es tal vez uno de los problemas más graves y silenciosos que enfrentan los pobladores. Primero, porque el desempleo, que según el secretario de Gobierno de Tumaco, Hernán Cortés, ronda el 70 por ciento entre los jóvenes, es uno de los principales factores para que los adolescentes sucumban ante la ofensiva de los grupos armados. Según personas que están en el terreno, los proyectos de las ONG y del gobierno no han frenado tampoco la incidencia de los grupos armados en el reclutamiento de menores. “Han sido proyectos sin una visión de reconstrucción social. El mayor enfoque del Plan Colombia ha sido el proyecto militar, no tanto acabar con la droga, sino más bien justificar la guerra”, explica la hermana May. “Había bastante plata para programas radiales, compraron lanchas, camionetas, chalecos, pero después de seis meses o un año esos programas se terminaron. Han sido programas de inversión social como pretexto, sin lógica ni sostenibilidad”, agrega May, quien considera que ni el gobierno colombiano ni el de Estados Unidos ni el departamental, tienen voluntad política para construir otra realidad.

Por otra parte, la Corte Constitucional se pronunció frente a la difícil realidad de la población desplazada y el 26 de enero de 2009 emitió dos autos en los que ordenó a las instituciones estatales correspondientes la protección de los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento. Exigió el diseño y la implementación de un “programa de garantías” y la creación de “planes de salvaguarda” para treinta y cuatro pueblos indígenas, entre los que estaban los pueblos awá y eperara-siapidara.

En el caso de los awá, en convenio con el entonces Ministerio del Interior y Justicia, se elaboró un diagnóstico y se formularon propuestas para su plan de salvaguarda que, según fuentes consultadas, nunca fue puesto en marcha por el gobierno. Lo mismo sucedió con el otro auto que emitió la Corte, en el que ordenó la protección de la población afro víctima de desplazamiento, con un enfoque que tuviera en cuenta sus costumbres y cultura. Esto incluía poner en marcha una “ruta étnica” para la protección de sus tierras y patrimonio, así como tomar medidas que garantizaran una atención humanitaria de emergencia de manera integral, oportuna y completa. Apenas a finales de 2010 las comunidades afro de la zona lograron, con el apoyo de la Diócesis de Tumaco y de algunas ONG, elaborar participativamente un material didáctico y empezar un proceso de socialización. “Pero, frente a las tareas que corresponden a las instituciones estatales para cumplir las órdenes de la Corte, existe un descontento generalizado, porque no hay avances”, dice el informe de la Diócesis de Tumaco, el cual agrega que gracias a la presión de diversas organizaciones de derechos humanos, la atención por parte de las instituciones estatales empezó a mejorar en 2011.

Por otra parte, contradiciendo los hallazgos de esta investigación, y el sentir y la experiencia de diversas fuentes consultadas, en declaraciones radiales el comandante de Policía de Tumaco aseguró que la seguridad del municipio estaba garantizada y que la fuerza pública controlaba cada rincón del mismo. “Los habitantes del puerto nos preguntamos de qué ciudad habla el oficial”, comenta un dirigente local para referirse al control que tienen los grupos armados ilegales de ciertas zonas en las que cualquier ciudadano tiene que pedir permiso para entrar y en las que la Policía no lo puede hacer sin generar una balacera.

## Buenaventura, arrasada por la guerra

Una visita a este puerto basta para dejar en claro que existen por lo menos dos Buenaventuras. Una es el puerto en sí, el más importante del Pacífico colombiano, en el que cada vez se requiere de menos mano de obra, y otra la ciudad donde la industria ilegal es próspera porque genera empleo y recursos considerables para quienes la manejan, en este caso la guerrilla de las Farc y la banda criminal de los Rastrojos. La situación social del municipio es caldo de cultivo para la ilegalidad: con más de medio millón de habitantes, 34 por ciento de la población no tiene acceso a servicios públicos. Como sucede en Tumaco, en Buenaventura el tráfico de drogas alcanzó su auge porque el municipio pasó de ser solo lugar de embarque para convertirse en punto estratégico para la cosecha, el procesamiento y la exportación de drogas, sobre todo de cocaína. A lo anterior se suma la minería ilegal, un negocio en el que estarían involucrados los Rastrojos, buscando lavar dinero.

Según el informe *Entornos complejos: Buenaventura*, de la Fundación Ideas para la Paz, la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y el Consejo Internacional de Industria Sueca (NIR), desde el año 2000 los negocios ilegales se fortalecieron con la llegada de las AUC y el bloque móvil Arturo Ruiz de las Farc, grupos armados ilegales que reconocieron la importancia estratégica de Buenaventura por su cercanía con Ecuador y Panamá.

Según fuentes consultadas, actualmente es evidente la presencia de estos dos actores armados, enfrentados por el control del territorio. Las Farc, por medio del Comando Conjunto de Occidente al mando de *Pablo Catatumbo* y *Pacho Chino*, controlan el área rural de Buenaventura, donde utilizan los esteros de los ríos para sacar la droga. Los Rastrojos, por su parte, hacen más presencia en la zona urbana, y en su caso las fuentes insisten reiterativamente en que son los mismos paramilitares desmovilizados, porque operan de la misma forma.

Hace cinco años, en Buenaventura se afirmaba, como si se tratara de una expresión popular, que ni siquiera los muertos volvieron a tener velorios. El 7 de septiembre de 2007, por ejemplo, y a pesar de que ya habían pasado dos años desde la desmovilización del bloque Calima de las AUC, varios hombres que se movilizaban en un colectivo arremetieron contra los asistentes al funeral de un joven asesinado horas antes. “Los pocos dolientes llegan temprano y se van antes del toque de queda. A otros, el miedo no los deja siquiera asistir”, escribió José Luis Valencia en un reportaje de la revista *Semana*, para describir la zozobra que vivía el puerto.

Un año antes, en 2006, en Buenaventura se registraron 408 homicidios, cantidad que superó en 17 por ciento a la de 2005 y que fue la más alta en la última década. “Semejante tasa de homicidios la llegaron a sufrir capitales como Medellín y Cali en días de los carteles del narcotráfico”, escribió Valencia. El alcalde de la época, Saulo Quiñónez, expuso abiertamente las razones: “Las muertes son por choque territorial de narcotráfico y grupos armados. Tres de cada cuatro muertos están relacionados con la tríada narcotráfico, guerrilla y lo que ha quedado de las autodefensas”. Una representante del Proceso de Comunidades Negras (PCN) afirmó que quienes empezaron con los asesinatos venían de Medellín. “Eran sicarios, andaban en motos, con gafas negras, eran hombres blancos”. Pero poco a poco y sistemáticamente fueron reclutando jóvenes. “Se metió el tema de la droga en esas banditas que había entre los barrios. Eran muchachos normales que ahora vendían droga, se fueron armando y la situación se complicó”.

El narcotráfico, que durante años fue manejado por los Patiño Fόμεque, el *Joven* o el extraditado Wenceslao Caicedo, conocido como el temido *Señor de la Motosierra*, había quedado en manos de bandas lideradas por Wílber Varela, *Jabón*, *Holmes* y otros grupos de desmovilizados del bloque Calima, que extendieron sus tentáculos a la administración municipal.

Pronto empezaron a salir a la luz pública los escándalos por corrupción relacionados con el narcotráfico y protagonizados por funcionarios públicos. El que tuvo más notoriedad se destapó un año antes de que se recrudesieran las muertes violentas en el puerto. El 26 de octubre de 2006, en un consejo comunitario, el entonces presidente Álvaro Uribe le exigió al secretario de Gobierno de Buenaventura, Adolfo Chipantiza, que abandonara el lugar, y ordenó su captura. Lo acusó de haber intentado sobornar al comandante de la Brigada de Infantería de Marina 2, coronel Héctor Pachón, para que devolviera una carga de cocaína.

Según el coronel, Chipantiza le pidió cambiar esa droga para “evitar un baño de sangre en Buenaventura por parte de los actores armados ilegales y los narcotraficantes”. Sin embargo, las investigaciones judiciales no pudieron comprobarlo. Primero el Tribunal Superior de Buga condenó al ex funcionario a 64 meses de prisión por favorecimiento a tráfico de drogas y luego fue absuelto.

Otro caso es el del polémico ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, capturado por parapolítica en abril del 2009 y quien, según múltiples denuncias, sigue influyendo sobre la administración de Buenaventura y sobre todas las decisiones políticas, incluso del departamento.

Martínez fue acusado de tener vínculos con Wenceslao Caicedo Mosquera, *W*, quien fue extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico, y también con Olmes Durán Ibargüen, conocido como el *Señor del Puerto*, preso en la cárcel de Cómbita. Éver Veloza, *HH*, ex jefe del Bloque Calima y Bananero de las AUC, lo mencionó también en sus declaraciones ante Justicia y Paz, y afirmó que en las elecciones de 2006 había recibido apoyo del bloque Calima.

## **Barrios en medio del fuego cruzado**

El mismo día en que el presidente Uribe denunció en público y ordenó detener a Chipantiza, el obispo de Buenaventura, monseñor Héctor Epalza, denunció la corrupción entre los uniformados, en declaraciones que le costaron su salida del municipio.

En este puerto, para espantar la muerte de los barrios, no han servido dos años de toque de queda en las comunas 3, 4, 5 y 12, ni ha sido suficiente la fuerza pública que el presidente Álvaro Uribe envió el año pasado (2005) para frenar los disparos. Hay más de 900 uniformados, con chalecos y cascos antibala, con armas y explosivos, en medio de niños y niñas descalzos.

Para las autoridades en ese entonces los enfrentamientos se daban entre milicianos del frente 30 de las Farc con paramilitares, incluida una docena de bandas encabezadas por quienes se desmovilizaron en 2004 y que se movían en barrios plenamente identificados. Si los homicidios ocurrían en los barrios Lleras o Alfonso López afirmaban que se trataba de una venganza contra milicianos; si eran en la calle Piedras Cantan del barrio Viento Libre o en El Firme, que eran los paras. Unos y otros son los barrios más pobres del municipio. Incluso, muchas de las muertes se dieron solo por *sospecha* o porque la víctima vivía en un determinado barrio.

“Siempre, aseguró en su momento el comandante de la Armada en Buenaventura, coronel Héctor Pachón, tras cada decomiso de droga hay una seguidilla de muertes de los jóvenes que estuvieron en la cadena, como si se quisieran borrar huellas”. Para el oficial todos los asesinados trabajaban al servicio del narcotráfico. Otra lectura era la del defensor Regional del Pueblo, Andrés Santamaría Garrido, quien hablaba de una crisis humanitaria producto del incesante fuego cruzado. En 2006, junto con la Misión para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el Valle del Cauca, su oficina emitió una alerta temprana, después de constatar las denuncias sobre los enfrentamientos en estos barrios. La dinámica de la guerra estaba cambiando entonces. Entre 2000 y 2004 la zona rural de Buenaventura fue la más afectada, y las masacres cometidas por los guerrilleros y los paramilitares en el bajo Calima y el alto Naya dejaron un rastro de horror. Mientras tanto, en el casco urbano solo se registraban asesinatos selectivos y algunos petardos. No obstante, la masacre a mediados de 2005 de 12 muchachos del barrio Lleras, a los que invitaron a jugar un partido de fútbol para luego torturarlos, asesinarlos y arrojarlos en un estero, fue interpretada como la primera señal de que la guerra había llegado al puerto.

Además, según una fuente del Plan de consolidación, sucedía algo particular allí, pero común a diversas regiones del país. “Un pela’o que hoy es paramilitar, mañana puede ser guerrillero. Ellos no mantienen una figura ideológica, es una situación más de negocio. Yo creo que los mismos muchachos no ven que son utilizados en una estrategia de guerra”, afirmó. Situaciones similares se observan en lo que se ha llamado la cadena de venganzas, de jóvenes que ingresan a alguno de los grupos armados ilegales o, incluso, a la fuerza pública, para vengar la muerte de algún familiar o conocido. Cuatro años más tarde el panorama seguía siendo preocupante. A comienzos de 2009, según registros oficiales, las cifras de homicidios habían disminuido pero aumentaron los casos de desaparecidos, así como las amenazas con panfletos. “Tenemos una alta preocupación con la situación de los desaparecidos, pues según datos estadísticos, de enero a la fecha (marzo de 2009) ya se registran alrededor de 16 casos”, dijo en su momento el alcalde José Félix Ocoró, preso luego por irregularidades en contratación pública y del que se afirma fue puesto en el cargo por Juan Carlos Martínez.

No obstante, los defensores de derechos humanos en el puerto tenían dudas sobre las cifras oficiales. La alcaldía de Buenaventura creó ese año el Observatorio del Delito, que hasta mediados de diciembre de 2009 había contabilizado 361 muertes en el año, siendo que 85 por ciento de las víctimas no superaba los 35 años de edad. Según el Observatorio, la franja de edad con mayor número de muertos estaba entre los 20 y 24 años, seguida de los de 30 y 34, y más de 70 por ciento tenía como actividad oficios varios. Sin embargo, estas estadísticas no incluían a los jóvenes que morían ya fuera por el narcotráfico o por el conflicto armado. “Muchos son los que van a los ríos o quedan entre los esteros”, se escucha decir.

Jóvenes reclutados por lo general en los barrios, primero como *campaneros* (desde los ocho o nueve años), y que si sobrevivían a lo largo de los años podrían ir *escalando* dentro de la organización, algo que sigue sucediendo.

De acuerdo con otro líder:

A los niños en las tardes los forman, les dan armas de juguete o palos y así los entrenan, a través de juego. Los guerrilleros los utilizan para poner bombas. A muchos los maltratan y los reclutan a la fuerza, pero a la gran mayoría terminan persuadiéndola con el poder de las armas (*sic*).



A finales de 2011, Buenaventura ocupaba el primer lugar en el ámbito nacional en desapariciones, por encima de Tuluá, segundo municipio afectado por este problema. Sin embargo, las cifras no son claras por falta de registros confiables. Según datos de la Personería municipal, desde 1996 se habían presentado 399 denuncias, de las que 108 personas aparecieron vivas y nueve muertas, sin que de los otros 282 casos (70 por ciento) se supiera algo. En 2010, por su parte, las denuncias presentadas fueron setenta.

Análisis posteriores del Observatorio del Delito encontraron que 40 por ciento de las muertes en Buenaventura eran causadas por los grupos vinculados con el narcotráfico; 25% por causa del conflicto armado; 7% se debía a venganzas; 10% a riñas; 6% por la delincuencia común; 1% en operativos oficiales contra presuntos delincuentes; y 10% estaba por establecer.

### **Continúa el riesgo**

En marzo de 2010 un atentado terrorista con un carro bomba estremeció aún más a Buenaventura, carro bomba contra el Centro Administrativo Municipal (CAM) y que causó la muerte a diez personas, cincuenta y nueve heridos y dejó cuarenta inmuebles afectados en varias cuadras a la redonda. El defensor nacional del Pueblo, Vólmar Pérez, condenó el hecho y recordó al gobierno que la institución había emitido el Informe de riesgo 032 del 24 de diciembre de 2008 y la Nota de seguimiento 034 del 16 de diciembre de 2009, que fue declarada alerta temprana por el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (Ciat) el 23 de diciembre del mismo año.

De acuerdo con el defensor:

Los factores de riesgo para la población civil en Buenaventura se han intensificado con la conformación de nuevos grupos armados ilegales que buscan ejercer control territorial en ese municipio del litoral pacífico para el desarrollo de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico.

Mientras autoridades civiles y militares atribuyeron el atentado al frente urbano Manuel Cepeda Vargas y al frente 30 de las Farc al mando de *Mincho*, la Fiscalía, por ejemplo, habló de la posibilidad de que se tratara de una guerra sucia entre grupos de narcotraficantes. Todo lo cual provocó reacciones en las autoridades nacionales, encabezadas por el presidente Uribe. Se militarizó entonces la carretera del puerto a Cali y se destinó un distrito entero de policía, al que se sumaron la Infantería de Marina y el Ejército. Después de unos meses se constató que, a pesar de la disminución de los homicidios, la situación no había mejorado sustancialmente y el clima de violencia permanecía. “Son soluciones militaristas que ya se han usado, que se sabe funcionarán por un tiempo. Pero seguimos sin una política integral para Buenaventura. De hecho, la estrategia es la misma para todo el Pacífico. Y ahí están los resultados”, según un editorial de *El Espectador*.

“En Buenaventura se piensa que el aumento del pie de fuerza es la solución, pero nunca lo ha sido. Al contrario. Los problemas han aumentado porque la violencia y los atropellos contra la comunidad ya no vienen únicamente de los grupos armados ilegales, sino también de la misma fuerza pública, y concretamente de la Policía”, dice un líder afro consultado.

La comunidad ha denunciado lo que llama “un matrimonio” entre la Policía y los paramilitares. “En los barrios ellos toman juntos. Entran al barrio, hacen el recorrido

en las motos y en la esquina se sientan a tomar con los paramilitares. La Policía ya no es garantía de seguridad”, dice una habitante del barrio Lleras. Otros pobladores aseguran que la Armada y el Ejército “observan todo desde afuera y permiten que se maten entre ellos, sin importar el riesgo que esto significa para la población civil”. También se han hecho públicas las denuncias del Comité por la Salvación de Buenaventura, formado por organizaciones sociales, culturales, de mujeres, pescadores y comuneros, sobre lo que llamaron un genocidio de gente negra.

Son seis años en los cuales el pueblo afrobonaverense ha tenido que convivir con el dolor y el horror de ver a sus hermanos y hermanas siendo asesinados, masacrados y desaparecidos. La impunidad es total, nunca se conocen los móviles, ni los responsables materiales e intelectuales de estos horrendos crímenes.

Numerosos líderes han pedido, bajo el anonimato, que se investiguen estos hechos como “una limpieza social”.

Y el desplazamiento sigue. “La gente se siente amenazada, tiene miedo y lo que hace es alistar una maleta de ropa, no puede salir con todo porque donde vean que hay un trasteo los grupos los presionan y hasta los matan si salen de la zona. A la gente le toca irse solo con su ropa”, dice otro habitante del barrio Lleras, barrio que en 2008 sufrió uno de los mayores desplazamientos intraurbanos, cuando doscientas familias tuvieron que huir a otros barrios por los intensos combates entre milicianos de las Farc y miembros de un nuevo grupo paramilitar.

En el informe de la Comisión Diocesana de Vida, Justicia, Solidaridad y Paz de Buenaventura, *El genocidio se agudiza mientras el desarrollo avanza*, publicado en agosto de 2011, se afirma que la agudización del conflicto tiene a la población sumida en una grave crisis humanitaria. “Al lado de los megaproyectos por contraste hay dolor, angustia de muchas víctimas, porque hay desplazamientos forzados, homicidios selectivos, desapariciones, confinamientos y victimización de ciertos sectores de la población”. Según este informe, la extorsión a personas y establecimientos comerciales pidiendo exageradas sumas de dinero se había generalizado y los homicidios selectivos habían aumentado considerablemente.

En el primer semestre de 2011 se agravó también la disputa por el control del territorio entre grupos paramilitares y guerrilla.

De enero a julio se registraron 138 homicidios selectivos, sólo en el mes de julio hubo 31 asesinatos y el 60 por ciento son jóvenes. Muchos de los asesinados son personas que llegan a los barrios en busca de la familia y los nuevos actores que tienen el control territorial en la zona los asesinan con el pretexto de que pertenecen al grupo contrario. Otro tanto son miembros de los mismos grupos, que después de utilizarlos los consideran un peligro y los eliminan, lo que produce la confrontación.

Igual que sucedía dos años atrás.

Las desapariciones aumentaron, ahora como estrategia para reducir el índice de homicidios. Según cifras oficiales, en los primeros seis meses de 2011 se reportaron 36 casos de desapariciones forzadas, aun cuando se sabe que las víctimas no denuncian por miedo y por las amenazas que reciben si lo hacen.

Por último en este análisis, no por ello menos grave, está el confinamiento. De acuerdo con la Comisión Diocesana hay barrios y veredas en donde los paramilitares y

guerrilleros controlan la entrada y salida de personas, restringen el transporte colectivo terrestre y marítimo e imponen horarios de llegada. “Los miembros de los grupos andan armados paseándose por las calles de los barrios y veredas, haciendo retenes a vehículos y personas, restringiendo las visitas de amigos y familiares que viven en otros barrios. Salir de madrugada es un riesgo”, dice el informe, que denuncia que todo lo anterior sucede en una ciudad con una cantidad alta de efectivos de la fuerza pública. De acuerdo con un líder afro, “La gente crea sus estrategias para permanecer en el territorio. Se va a la casa de algún familiar en otro barrio donde pasa días y hasta meses, puede que nunca vuelva”.

### **‘El reino de la indiferencia’**

Poco después de conocerse el informe de la Comisión Diocesana, el diario *El País* de Cali entrevistó a monseñor Héctor Epalza, quien tras siete años como obispo de Buenaventura la definió como “la patria del miedo” y volvió a denunciar que en el puerto la violencia había aumentado a pesar de que las cifras indicaran lo contrario. “Vemos que no hay voluntad política para solucionar nada, eso es lo más preocupante. Lo que hay es indolencia. La indiferencia está reinando”, dijo. En sus declaraciones el religioso aseguró que las Farc querían retomar el control de algunos sectores del puerto y que un altísimo porcentaje de jóvenes estaba involucrado con grupos armados.

Y mientras la muerte continuaba extendiéndose en Buenaventura y sus alrededores, los narcotraficantes perfeccionaban su negocio. En 2007, cerca a Buenaventura se incautó el primer semisumergible con una capacidad para cuatro toneladas de droga. Según el Ministerio de Defensa Nacional, entre enero y septiembre de 2009 se incautaron quince más, y en 2010 se descubrió un submarino totalmente sumergible capaz de transportar hasta 12 toneladas de droga en un recorrido de dieciséis días hasta Centroamérica.

En el informe de Ideas para la Paz, la Andi y NIR se afirma que para contrarrestar este nuevo modus operandi la fuerza pública dependía casi que totalmente de la inteligencia estadounidense. Iniciativas como el Plan nacional de consolidación tampoco han tenido gran impacto. De acuerdo con una fuente consultada:

Se hicieron algunas obras pero nada contundente. Las pequeñas inversiones mitigan un poco la situación pero no son soluciones reales. Hay mucha intervención, llegan comisiones de todos lados, pero hacen trabajos aislados y nunca un trabajo conjunto. El resultado es que la población se secciona. Tenemos un puerto pero a la carga que entra y sale no se le da un valor agregado.

En 2009 el entonces ministro de Defensa, Gabriel Silva, activó el Comando Conjunto 2 Pacífico para coordinar el trabajo de las Fuerzas Militares en todo el occidente del país. En Buenaventura, la Armada, por medio de la Infantería de Marina, empezó a brindar seguridad en los barrios pero, poco a poco, le entregó el mando a la Policía. La Fuerza Naval del Pacífico se ocupa de las operaciones en todo el litoral y realiza incautaciones, pero como se dijo cada vez es más difícil identificar los movimientos de droga. Y la Policía Antinarcóticos también hace su trabajo de vigilancia en la terminal de la Sociedad Portuaria controlando las cargas, los contenedores y las motonaves.

De acuerdo con Andrés Mejía Vergnaud, aunque las tasas de homicidios han disminuido en las calles de la ciudad, en el puerto y en los alrededores, la preocupación es

grande: “El imperio de las bandas armadas es casi absoluto; al parecer ellas controlan la economía local, cobran extorsiones de manera generalizada, imponen “sobretasas” al comercio de productos y regulan el ingreso de estos a los mercados locales. Parte de esta labor criminal la ejecutan las Farc, que ha empezado a regresar a la ciudad”. Un informe de La Silla Vacía de agosto de 2011 retrata la situación de terror que afrontaba el puerto entonces. “En las plazas de mercado de Buenaventura los paramilitares están cobrando vacunas a los vendedores que ya han pagado una sobretasa a los distribuidores. El plátano, la leche, el queso y el pollo se encarecieron por cuenta de los armados”. Pero no es el único cobro. Una vez los productos pasan ese primer retén, llegan a las plazas de mercado o a las tiendas de barrio, donde los vendedores tienen que pagar la siguiente ‘sobretasa’.

Los dueños de los negocios son vacunados por los Urabeños para poder vender y por la ‘seguridad’ que les ofrecen. Esta estrategia no es nueva. El cobro de ese impuesto a los distribuidores mayoristas y minoristas fue una de las formas de financiación y control que utilizó el bloque Pacífico de las Autodefensas desde 2003 y hasta su desmovilización en 2005.

Según la Defensoría del Pueblo, los Urabeños entraron al puerto para pelear rutas del narcotráfico con los Rastrojos. Al parecer lo hicieron de la mano del narcotraficante Víctor Patiño Fómeque, quien hasta mediados de 2010 estuvo preso en una cárcel de Estados Unidos, adonde había sido extraditado en diciembre de 2002. Según informes judiciales, Patiño Fómeque volvió al Valle del Cauca a recuperar sus rutas de narcotráfico en el Pacífico. De su regreso se empezó a rumorar a finales de 2010. De acuerdo con un reportaje de la revista *Semana*,

hoy las autoridades tienen la certeza de que el ex capo buscó a algunos viejos camaradas de la época del cartel y a nuevos narcos, con quienes forjó una alianza con el fin de recuperar muchos de los bienes que perdió mientras estuvo tras las rejas. Y, de paso, vengar la muerte de medio centenar de familiares, amigos, socios y conocidos, que fueron asesinados desde el momento en que fue extraditado.

A mediados de 2011, los comerciantes de Buenaventura le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le expresaron su preocupación por el deterioro del orden público y le pidieron definir una acción para que en “nuestro territorio no vuelva a establecerse el régimen de terror”. Denunciaban que había control de alimentos.

De acuerdo con una líder de una organización social:

Empezaron a aparecer nuevos supermercados, las verduras escaseaban, lo que se conseguía era costosísimo. Aquí la gallina dura, que la vendían las mujeres, no se pudo vender más porque un grupo paramilitar tomó la venta y empezó a hacerle el control, a decidir quién vendía y quién no.

Investigadores de la Personería y la Defensoría del Pueblo piensan que después de la época de la incompleta desmovilización paramilitar en Buenaventura los grupos armados se reorganizaron. A lo que se suma que las Farc también volvieron a entrar en el casco urbano pero actúan desde la clandestinidad.

En agosto de 2011 en el puerto circularon rumores de que la guerrilla y los paramilitares habían hecho un pacto de no agresión, para lograr el retiro de las tropas, hasta

después de las elecciones regionales de octubre de ese año. La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó por la difícil situación de orden público en las zonas de bajamar e insular, originada por la presencia de actores armados de diversos grupos. La situación había llegado a ser tal que incluso los candidatos a las elecciones locales excluyeron de sus discursos el problema del (des)orden público.

De acuerdo con un informe de La Silla Vacía:

En un debate que se realizó hace un par de semanas en una emisora del puerto, ninguno (de los candidatos) aceptó responder a las inquietudes que los periodistas tenían sobre la seguridad. El argumento es que ese tema le corresponde al gobierno nacional y no al local, porque desde 2006 funciona un Comando Operativo Especial de la Policía que se entiende directamente con el general Óscar Naranjo, (ex) comandante de la Policía.

Pocas semanas antes de esas elecciones, la Defensoría del Pueblo reportó dos desplazamientos masivos en la cuenca del río Anchicayá, donde 1.460 personas se vieron obligadas a abandonar sus sitios de origen a causa de acciones violentas de los grupos armados al margen de la ley. Y antes de terminar ese año (2011), el Sistema de Registro de Personas Desaparecidas reportó 84 casos nuevos.

A todo lo anterior se suma que desde hace algunos años Buenaventura es el punto de llegada de los desplazados provenientes del Pacífico nariñense y caucano y del Chocó, algunos de los cuales utilizan el municipio para llegar a Cartago o a Cali. Cifras oficiales estiman en más de 60.000 el número de desplazados.

Para la Misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de los Estados Americanos (MAAP-OEA), el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, más que restablecer la tranquilidad y la seguridad en Buenaventura, propició la activación de una nueva fase de confrontación armada y acciones violentas que no concluirá hasta que uno de los actores armados ilegales implante su hegemonía o se establezca *de facto* un acuerdo de no agresión, convirtiendo el puerto en un territorio fragmentado, que restringirá la legitimidad y gobernabilidad del estado. A lo anterior se suma que la comunidad, en especial la afrodescendiente, no ve con buenos ojos el trabajo de los militares. De acuerdo, con uno de los líderes de la PCN:

Nosotros entendemos su trabajo, pero no compartimos su visión. Tratan a todos los que no están de acuerdo con ellos, como delincuentes. Nos hemos ofrecido a brindarles talleres sobre el tema de derechos colectivos para que entiendan la diferencia de los territorios (afro) y que no somos enemigos del Estado, pero aun así creo que no nos entienden.

Según el informe de la FIP, la Andi y NIR, a finales de 2011 en Buenaventura no había Bacrim alguna que fuera capaz de competir con los Rastrojos. *Apache 4* (preso) y *Apache 5* eran la conexión con el capo Javier Calle Serna, *Comba*, que en mayo de 2012 se entregó a la DEA, y debajo de ellos estarían *Trenzas* y *Firmas*, "puente directo entre miembros de la Armada en Tumaco a quienes les pagan unos cinco millones al mes para que les autoricen el paso de embarcaciones cargadas con droga".

Informes más recientes afirman que *el Quemado* es el encargado del puerto, seguido por *Wicho* o *William*, *don Ira* y *Sindy*. "Se sabe que el anterior líder era alias *Malabas* que fue asesinado por las Farc, lo que puede estar generando el aumento de desapariciones por retaliación", dice el informe.

## Preguntas y recomendaciones

Al analizar la seguridad en Tumaco y Buenaventura y preguntarle a la gente del común qué debería hacer el Estado para cambiar la realidad de los puertos donde viven, la primera respuesta es generar más oportunidades de desarrollo y la segunda el fin del conflicto armado.

Como dijimos, este y el narcotráfico son los principales empleadores y financiadores de las economías locales de estas dos poblaciones del Pacífico colombiano. Al preguntarle a los jóvenes por las alternativas que tienen para no involucrarse con grupos armados legales e ilegales o para no caer en la dinámica del narcotráfico, algunos respondieron que necesitan una sociedad que los proteja con más educación, cultura y propuestas económicas para poder desarrollarse.

“Los programas de producción alternativos son pura pantalla, basados en estudios de escritorio, sin conocer el territorio”, dijo una de las fuentes en Tumaco, lo que revela la falta de incidencia de los proyectos desarrollados por las instituciones del Estado, los organismos internacionales y las ONG.

De allí que surja la pregunta de ¿cómo subsanar, solventar, sustituir o reemplazar los deberes de una institucionalidad que no funciona, pero que se supone estatuida para cumplir con sus obligaciones?

Las debilidades institucionales hacen que la autoridad de los grupos armados ilegales predomine sobre la institucionalidad. La inoperancia de las instituciones y la desconfianza ciudadana en las mismas obligan a los ciudadanos a estar sometidos a los poderes *de facto*.

Si la institucionalidad no funciona, ¿qué tipo de instituciones se deben crear para que los habitantes de Tumaco y Buenaventura, sobre todo los jóvenes, no terminen por involucrarse en el conflicto armado, si el Estado también necesita de combatientes?

De acuerdo con un líder barrial en Tumaco, “es triste que la Policía y el Ejército estén de una manera indirecta involucrando a los jóvenes como informantes, tanto niños, como niñas y adolescentes”.

¿Cómo solucionar la vinculación de civiles al conflicto armado y el reclutamiento forzado de menores? Una mujer en Buenaventura describe muy bien el reto al que se enfrentan día a día cientos de jóvenes que no tienen mayores opciones:

A estos niños los reclutan, quieran o no se los llevan, los cogen como informantes, como ‘campaneros’ y se aprovechan de la situación de pobreza en que viven. Les dicen “mira yo te doy esto para que lleves a tu casa”, y ese niño que no tiene para el almuerzo y que ve a su mamá desesperada, en su afán de ayudar comete el error de irse por lo más fácil.

Pero no es una decisión fácil de tomar. Una psicóloga que trabaja con jóvenes en Buenaventura explica el temor que sienten:

Ante la amenaza de ser reclutados, los jóvenes sienten desconfianza hasta de sus amigos. Ya no tienen la libertad de confiar en otros jóvenes, de andar libremente en las calles como hace años que se podía andar tranquilamente de noche y de día, sin

temor de que suceda algo, de que una bomba explote o de que algún grupo armado los vea como potencial para reclutarlos.

El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Pegaso, general Mario Valencia, que opera en Tumaco, reconoce la complejidad del problema de reclutamiento forzado:

Desafortunadamente es algo que hay que reconocer, tanto las bandas criminales y las guerrillas reclutan forzosamente menores de edad, los emplean en primera línea de combate, como estafetas, los emplean en su parte logística, para producir minería ilegal, en laboratorios y cristalizaderos, y lo más delicado es que los emplean para adelantar acciones con artefactos explosivos, afectando a la misma población civil.

Un joven consultado para este informe sabe del riesgo que corre:

Las oportunidades son muy difíciles aquí en nuestro entorno: no hay oportunidades de estudio, no hay oportunidad de trabajo, pero sin embargo hacemos teatro, trabajamos con niños, con jóvenes como nosotros. Así me siento un poco en paz conmigo mismo, no tan vulnerable a los grupos armados, porque estoy concientizado sobre lo que puede pasar en mi vida si llego a pertenecer a grupos como esos o el daño que le puedo hacer a mi comunidad y a la sociedad.

¿Acaso se necesitan instituciones *ad hoc* que reemplacen provisionalmente a las que no funcionan? “Se complican (las que existen) con la burocracia que no ayuda con la transparencia. Lo que vemos es un gran encuentro de todas sus organizaciones con sus chalecos, pero pronto desaparecen”, dice un líder de Tumaco.

La población civil sigue siendo la principal víctima del conflicto armado y la lucha contra las drogas consume los esfuerzos de la burocracia estatal y la mayoría de los recursos. Por eso no es un cliché que se necesita más inversión social y encontrar una salida económica a las necesidades de miles de familias que viven en la miseria. Por el momento, el centro de la Política nacional de consolidación es la guerra contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales, mientras que la violencia contra la población civil continúa y el desempleo, la injusticia y la pobreza en Tumaco y Buenaventura son de los más altos en el país.

En este orden de ideas, ¿qué tipo de institución se debe crear para fomentar oportunidades laborales y económicas diferentes al narcotráfico? Para empezar, “que haya políticas sinceras de querer acabar esta guerra”, pide otro líder en Buenaventura. En Tumaco agregan que hay un trabajo que no se ha hecho y que consiste en que las mismas comunidades elaboren su plan de vida, “sin esperar que las ONG extranjeras vengan con proyectos ya elaborados”.

La principal demanda de las personas consultadas en los dos municipios es que la institucionalidad se ponga de su lado y que, además, le garantice su seguridad, siendo un contrasentido cuando la presencia del Estado es predominantemente militar. ¿Cómo concientizar a los miembros de la fuerza pública de que deben garantizar la vida y la integridad de los civiles ajenos al conflicto armado? Algunas personas consultadas no entienden aún por qué las autoridades siguen viendo a muchos de los habitantes de Tumaco y Buenaventura como sus enemigos e incluso los señalan como combatientes de civil.

Es muy difícil el ambiente social. Uno de mis hijos tiene 14 (años) y todavía no me ha dicho cuál es su sueño, el pequeñito dice que quiere ser policía, pero ya les tiene miedo

porque andan armados. Mirando a los niños es donde uno tiene que armarse de valor y esperar, si es posible, a que las instituciones nos apoyen. ¿Acaso no son esas organizaciones las que velan por la sociedad y porque estos problemas sean destruidos?

La política oficial predominante es asistencialista y no se establecen políticas de prevención a delitos como el reclutamiento y la violencia sexual. Además, ¿cómo prevenir estos crímenes cuando la misión de la fuerza pública es dedicar la mayor parte del tiempo a perseguir narcotraficantes y grupos armados al margen de la ley? Si el estado no funciona combatiendo delitos tan complejos como el desplazamiento, la violencia sexual y el reclutamiento de menores, ¿puede una institución *ad hoc* reemplazar la acción del estado y actuar para prevenir estos delitos? De acuerdo con Antonio Navarro Wolf, “Mientras los delincuentes tienen continuidad, el estado no lo hace”. Una madre en Tumaco explica la situación a la que se exponen las jóvenes:

El riesgo que las jovencitas tienen es que estos nuevos grupos las obligan a convivir con ellos, las violan, las maltratan y si esas chicas no quieren acceder a todas sus pretensiones lo que hacen es matarlas, las meten también como informantes, las convencen y se las llevan a sus filas.

Las preguntas continúan.

¿Qué hacer con las ONG y las agencias de cooperación internacional que destinan personal y recursos considerables para intervenir en estos municipios, pero que poco comparten las políticas públicas que ejecuta el Estado en seguridad y protección a la sociedad civil?

¿Cómo fomentar la participación ciudadana y la confianza en las autoridades, cuando el principal temor de los habitantes en Tumaco y Buenaventura es que sus casos terminen en la impunidad o que sean revictimizados por cuenta de las complicidades entre funcionarios y grupos armados legales e ilegales?

¿Cómo hacer desde la legalidad para que las bandas criminales, los narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares, pierdan su dominio sobre el territorio y la ciudadanía, y para que esta confíe en las instituciones?

¿Cómo comprometer a una ciudadanía a que lidere el cambio y cómo hacer funcionar instituciones esenciales como la justicia?

Es claro que es necesaria una visión integradora que reemplace la idea de Estado guerrero tan afianzada en la historia del país, por un Estado de paz que tenga su centro en la población civil.

Fescol  
Calle 71 n° 11-90  
Bogotá, Colombia  
Teléfono (57 1) 347 30 77  
[www.fescol.org](http://www.fescol.org)

International IDEA  
Strömsborg, SE-103 34  
Estocolmo, Suecia  
[www.idea.int](http://www.idea.int)

ISBN 978-958-8677-12-5